

“En Colombia se ha constituido un plan de exterminio contra los firmantes del acuerdo de paz”

El exguerrillero de las FARC Pastor Alape, uno de los máximos dirigentes de la “resistencia agraria frente a la agresión del Estado”, pasa balance a los más de tres años de cese al fuego en Colombia. Presente en los Acuerdos de Paz de La Habana, Alape subraya que el alto el fuego es “lo mejor” que hicieron y se deslinda “claramente de cualquier posibilidad de recurrir nuevamente a la violencia”, pese a que denuncia “una política sistemática de aniquilamiento” y un “plan concreto para asesinar la paz”. Como actual miembro de la Dirección Nacional de la reconversión política de las FARC, hoy está volcado en la reincorporación colectiva de antiguos combatientes a la vida civil.

J. Marcos y M^a Ángeles Fernández / Bilbao
@desplazados_org

Nació en Puerto Berrío, departamento de Antioquia, pero creció en la clandestinidad, empuñando sus ideales desde la trinchera de las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. “Obligado a tomar el fusil para defender a los marginados”, Pastor Alape ingresó en la guerrilla de orientación marxista-leninista en 1979, apenas estrenando la veintena. Hasta que llegó un momento en el que las crónicas que perfilaban las fronteras del país siempre cabalgaban sobre sus hombros. Tras pasar por los puestos de mando de varios frentes de combate en los años más sangrientos del conflicto armado, fue designado jefe del Bloque del Magdalena Medio y posteriormente miembro del Secretariado de las FARC. Estados Unidos puso precio a su cabeza: 2,5 millones de dólares.

— **“La paz es un proceso. Es la suma de muchos actos, pequeños y grandes, decisiones e indecisiones.** Y en Colombia es mucho más complicado, pues en toda su historia no conoce un solo momento de funcionamiento pleno de la democracia liberal. Fuimos una sociedad que fue creciendo resolviendo los conflictos de manera violenta, ya desde antes de la independencia, en las primeras luchas independentistas. Se fue construyendo un criterio de cómo tratar las diferencias, de cómo burlar al otro. Y siempre primó el instrumento de la violencia. Fue una herencia que nos llevaron de desde aquí, desde este continente [en referencia a Europa].

En ese contexto surge el proyecto político de las FARC. No para desarrollar la guerra popular prolongada, sino como una guerrilla de resistencia agraria frente a una agresión que establece el Estado colombiano para atacar a unos ciudadanos. Pero eso fue mal visto, pues en América Latina estábamos en un momento muy particular de la Guerra Fría y todo se veía con ese sesgo, como producto de la incidencia de la revolución cubana o de los soviéticos. Eso justificó la agresión a un grupo de campesinos que proponían otro modelo de desarrollo”.

Entre medias, dos pasos adelante y otros dos pasos atrás hacia la construcción de la paz, intentos especialmente reseñables con los Gobiernos de Julio César T. Ayala (1978-

1982), Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002) y Juan Manuel Santos (2010-2018), presidente este último con quien se llegó finalmente a los Acuerdos de La Habana de 2016. “Esa es la historia de las FARC, la búsqueda continua de diálogos”, subraya Alape.

— “Como sociedad tenemos que evitar las viejas metodologías de parar los conflictos; de otra manera, difícilmente nuestro planeta va a seguir existiendo. De ahí que las FARC haya clamado por que no entráramos en el conflicto armado. **Quiero significar esa persistencia en la búsqueda de la paz por parte de la guerrilla.** Esa era ya la dinámica desde el inicio. Crecimos así, haciendo los preparativos de la guerra, pero pensando en cómo abrir diálogos en las regiones.

Ayala planteó la amnistía y nosotros le salimos. Así nos fuimos hasta 1984, con Betancur. Pero el diálogo era que nosotros nos sometiéramos. ¿Y las reformas? ¿Y las causas que originaron el conflicto? No se pudo hacer nada. Con Belisario sí firmamos unos acuerdos, pero no los cumplieron. Y, sin embargo, íbamos: lanzamos la UP [Unión Patriótica] como plataforma política; pero se nos reían y comenzaron a matarnos. Después Gaviria nos bombardeó con su guerra integral. Luego llegó [Ernesto] Samper [1994-1998] y no pudimos hacer nada. Llegó Pastrana y tampoco se pudo concretar el acuerdo de paz, después nos dimos cuenta de que tampoco estaba interesado el Gobierno, que simplemente necesitaba un respiro. Entonces llegó [Álvaro] Uribe [2002-2010] y desarrolló toda su ofensiva de falsos positivos, de recursos malversados, la ofensiva el paramilitarismo... todo lo que caracterizó su Gobierno. Es cuando decidimos volver a salir al escenario”.

Firmados en septiembre de 2016 tras más de cuatro años de encuentros y desencuentros, los Acuerdos de La Habana marcaron un antes y un después en la vida de Colombia. Nunca resultó fácil, tampoco a partir de la rúbrica. El cese al fuego definitivo afrontó obstáculos ya desde sus inicios, con un [plebiscito que en octubre rechazó por la mínima](#) (50,21 por ciento) los pactos alcanzados, obligando a la [posterior modificación](#) de los mismos. “**La desinformación hizo que la sociedad colombiana dijera ‘no’ a la paz**”, se lamenta Alape.

— “El debate siempre estuvo en que el acuerdo tenía que contener y manifestar con claridad la búsqueda de soluciones a los orígenes del conflicto; por eso el primer tema fue el de la tierra, el de la reforma rural. El centro del conflicto político está y sigue siendo la tierra. Ese desajuste en las bases económicas de Colombia es lo que ha mantenido las violencias en Colombia.

Colombia se caracteriza por una profunda **concentración de la tierra** de manos de muy pocos ciudadanos. Es un régimen con unas relaciones productivas semif feudales. La tierra se tiene no para producir, la tierra se tiene para capitalizar”.

El ‘no’ a los acuerdos fruto del plebiscito supuso la primera piedra en el camino de otras muchas que vendrían después, incluidas las muertes que todavía en la actualidad salpican el conflicto colombiano: **173 exguerrilleros han sido asesinados** desde la firma de los Acuerdos, 77 de ellos en 2019, el año más violento, según arroja el [último informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas](#). Y extendidas a otros liderazgos sociales y políticos, incluidas defensoras y defensores de los derechos humanos, las muertes se elevarían muy por encima del medio millar desde el acercamiento de posturas entre Santos y las FARC-EP; así lo revelan [recientes estudios llevados a cabo por organizaciones como Human Rights Data Analysis Group](#),

organización no gubernamental que denuncia que los asesinatos han aumentado desde aquel 2016.

— “El fenómeno es estructural, parte de cómo funciona el Estado colombiano. Hay factores de intereses económicos y políticos. Si se hace el traslape de los asesinatos y los territorios que están poniendo los muertos, por debajo encontramos que **hay solicitudes y disposiciones para economías extractivistas, megaproyectos**, etc. De alguna manera, **son territorios que se requiere vaciarlos de las comunidades**”.

Pese a todo, los Acuerdos de La Habana continúan vigentes bajo el tenso escrutinio tanto del Gobierno como de unas FARC reconvertidas, desde finales de agosto de 2017, en partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la que Alape forma parte de su Dirección Nacional.

— “El primer debate lo hicimos en el congreso fundacional. El presidente del partido, el excomandante de la organización, [Rodrigo Londoño, alias Timochenko] planteó si era mejor que nos cambiáramos el nombre. La mayoría dijo que teníamos que conservar el nombre para no traicionar nuestros lineamientos. Ganaron y entonces nos tocó seguir con FARC como nombre del partido”.

Poco más de tres años después de la firma de la paz, ambas posturas siguen mirándose con recelo y entre acusaciones cruzadas. Por un lado, el Estado; paradojas de las urnas, las elecciones presidenciales de mayo de 2018 las ganó el sector que más se opuso a los Acuerdos, el Centro Democrático del presidente Iván Duque. En el otro lado, las FARC partido, también presente en las instituciones, pues en las negociaciones de La Habana se aseguraron cinco escaños garantizados tanto en la Cámara de Representantes (de 172 representantes) como en el Senado (con 108 senadores). “Si en 2026 no sacamos ya los senadores y los representantes por voto propio, aunque sea uno y uno, quedamos fuera. Es el tiempo del que disponemos para poder funcionar y seguir funcionando como partido”, aclara Alape.

Ejecutivo y FARC continúan sentados alrededor de una misma mesa, ahora denominada Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la instancia bipartita creada con el objetivo de establecer el cronograma y dar seguimiento al proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP. Con dos representantes por cada una de las dos partes, en esa mesa también se sienta Alape. Quizá por toda su trayectoria pretérita y presente es difícil no pensar que, cuando este exguerrillero colombiano mira a los ojos, te observa una parte de la historia reciente de Colombia forjada a contrapelo de la versión oficial. **Y apenas aparta su mirada para responder.**

— “No se trata de un proceso de reinserción, sino de **reincorporación**. Eso ha sido muy duro de que lo entiendan los funcionarios. Se trata de garantizar, desde la democracia, **la formación de un sujeto político** que actúa en ese mismo contexto de la democracia. No es un sujeto que llega sometido”.

Tras pasar por Ginebra (Suiza), Alape visita Bilbao y conversa públicamente con el director del Instituto Hegoa, Karlos Pérez de Armiño, en un diálogo posterior a la entrevista en el que continúa analizando la situación del país cafetero. Su llegada a la capital vizcaína coincide con el enfrentamiento copero entre el Athletic y el Granada, duelo futbolístico que sirve de excusa para cruzar unas primeras palabras y dejar entrever que sus principios también se proyectan en el ámbito deportivo: seguidor convencido del

Deportivo Independiente Medellín, “el equipo de los obreros de Colombia, no el de los ricos”, Alape está repleto de memorias y sobrante de retos. Tal vez eso explique que el encuentro se hace tan corto como intenso.

Poco más de tres años después, ¿qué evaluación haces de los Acuerdos de Paz de La Habana?

Nosotros hemos concluido que el acuerdo no ha fracasado, que no es fallido, que ha movilizó a la ciudadanía en esa búsqueda de la articulación de la esperanza. No puede verse exclusivamente desde el compromiso con una de las partes firmantes, sino en sus efectos de abrir la democracia. Por supuesto que tiene suprema incidencia que se le cumpla al actor con que se firmó el acuerdo. Y, en ese sentido, hemos sido muy objetivos al manifestar que, de la implementación del acuerdo, apenas habremos alcanzado el 14 o el 16 por ciento.

La participación en el Congreso o la sostenibilidad de unos recursos para el sostenimiento de los exguerrilleros, o la atención de salud... ninguna de esas acciones puede compararse con la decisión contundente de la dejación de armas, del desmonte de las estructuras armadas, de la disposición de los bienes y del cese al fuego, que fue exitoso.

¿El Gobierno ha cumplido con las responsabilidades que asumió en los Acuerdos?

Lo central no se ha implementado; por ejemplo, la reforma rural integral. El programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que es fundamental y clave para poder quitar el combustible al conflicto, este Gobierno entró a desmontarlo y no ha sido posible que se active. A eso hay que sumarle el número de liderazgos que vienen promoviendo la implementación del acuerdo y que han sido asesinados. Por eso estamos hablando de una política sistemática de aniquilamiento de los firmantes. Lo que se ha constituido es un plan de exterminio contra los firmantes del acuerdo de paz.

Ese plan de exterminio se extiende a todos los promotores de la paz en Colombia. Es decir, a los liderazgos que propugnan que se implemente lo acordado: mujeres, lideresas, comunidades étnicas, campesinos que plantean la reforma rural integral y la restitución de tierras... a todos esos liderazgos son los que están asesinando. **El plan concreto es asesinar la paz.** Vemos configurado un plan concreto de **aniquilar a los defensores**, a los promotores y a los firmantes de la paz, una política establecida para que el acuerdo fracase de cualquier manera, al menos físicamente.

Precisamente en ese contexto de incumplimiento, se habla incluso de traición por parte del Estado, de una oportunidad perdida. De hecho, algunos han decidido retomar las armas; entre ellos, altos cargos de las FARC guerrilla como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich.

La decisión que tomaron nuestros antiguos compañeros es una decisión de la que ellos tendrán que responder a la historia y al país. Nosotros la respetamos, pero no la compartimos y nos deslindamos claramente de cualquier posibilidad de asumir un camino en ese sentido, dado que consideramos que estamos en otras condiciones y que es necesario empezar a abrir nuevos escenarios de acción en este siglo XXI.

Frente a todos esos asesinatos, lo primero que hemos dicho es que **no recurriremos nuevamente a la violencia.** La violencia queda proscrita como instrumento de lucha por las ideas. Ese es nuestro compromiso y le hemos dedicado el esfuerzo y todas las energías. En ese sentido, hemos venido exigiendo al Gobierno nacional que convoque al pacto político nacional de todas las fuerzas contra la violencia,

es decir, que podamos garantizar que ningún actor político, ningún actor económico, va a promover la violencia. Desafortunadamente, la violencia es parte de la condición de la existencia del partido de Gobierno y es quien ha venido polarizando y promoviendo el odio en el territorio.

O sea, que el incumplimiento o el cumplimiento parcial por parte del Gobierno de los Acuerdos, ¿en ningún caso justificaría ya un regreso a las armas por parte de FARC?

El acuerdo de paz no lo vemos solo desde el cumplimiento estricto a los exguerrilleros en la implementación del acuerdo. Lo vemos como el conjunto de factores que requiere la sociedad colombiana para su transformación. El acuerdo ha despertado el surgimiento de una **nueva ciudadanía que se manifiesta** en estos tiempos posmodernos. Hay otras realidades políticas que hoy nos esforzamos por comprender. Vemos una ciudadanía muy activa en ese proceso del tejido colectivo de la esperanza de la paz.

Es muy complicado hacer análisis retrospectivo, pero lo que siempre seguimos afirmando es que el acuerdo fue lo mejor que hicimos. La sociedad colombiana no aguantaba más y mucho menos iba a aguantar que, terminándose el Gobierno de Santos, nosotros no hubiéramos firmado. Ese habría sido un escenario mucho más propenso para desarrollar la acción política del Centro Democrático. Y una paz armada no se iba a sostener. Si nosotros volvíamos a la guerra después de prácticamente seis años de estarle diciendo al país que era la paz, el país no lo hubiera entendido. La batalla política la hubiéramos perdido.

¿Por qué ahora esa postura tan clara en contra de la violencia? ¿Por qué no antes?

El conjunto de la organización tomó la decisión de mantener el proyecto político de FARC en el marco del nuevo escenario de la democracia y para profundizar la democracia. Y el colectivo, la mayoría, nos la jugamos para dar la pelea por establecer un nuevo campo de batalla, que es el campo de las ideas y de la acción permanente para fortalecer esos espacios de la democracia y la participación política. Es la mayoría, la decisión del colectivo, en la décima conferencia, que llevó a afirmar y a refrendar el acuerdo de paz. A partir de esa decisión colectiva, asumimos esa línea de acción política y nos la jugamos toda en ese escenario de la construcción de paz, de construir una cultura de paz. A eso le apostamos y en eso estamos.

Regresando a los Acuerdos de Paz de La Habana, esta vez al otro de los firmantes, ¿ha cumplido y está cumpliendo las FARC con los compromisos adquiridos?

Las **FARC empezó cumpliendo lo fundamental**, que se cumplió al cien por cien: el cese al fuego. **Se cumplió con la dejación de las armas.** Todo el acto contundente de la desarticulación de una organización armada, que era lo central del acuerdo, se cumplió por nuestra parte. Cumplimos la disposición de los bienes para la reincorporación y la reparación a las víctimas, que era como inicialmente había quedado en el acuerdo.

Y hemos venido trabajando en otras acciones. Por ejemplo, en la sustitución de cultivos de uso ilícito. También en las acciones para el desminado humanitario, para descontaminar los territorios a partir de la información de la que disponemos de los territorios afectados por nuestra acción. Estamos desarrollando acciones en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, estamos compareciendo ante la Comisión de la Verdad, entregando nuestra versión del conflicto. Y estamos compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), frente a todos los hechos que se impugnan a la organización. Nuestra disposición ha estado cien por ciento dedicada a las tareas del acuerdo.

En todo caso, esa decisión de abandonar las armas y ese rechazo explícito a la violencia, ¿continúa siendo un debate abierto en el seno de las FARC? ¿En ningún caso el asesinato de exguerrilleros puede hacer quebrar ese compromiso contra la violencia?

La política se hace sobre realidades, no sobre deseos. Y por supuesto, a la política la acompañan las emociones colectivas. Y aquí hay una emoción colectiva en cuanto a la sociedad colombiana, que es el cansancio de la guerra: **la gente ya no quiere más guerra** en Colombia.

Las elecciones presidenciales de 2018 le dieron un número importante de votos al candidato del cambio [Gustavo Petro], con más de ocho millones de votos. Después vino la consulta anticorrupción y hubo una ciudadanía que votó por el cambio, diciendo que esto no puede seguir así, polarizado, donde se roban los recursos, donde los sectores de poder se apropian de los recursos públicos. En las últimas elecciones, en las regionales, el partido de Gobierno salió derrotado en las regiones donde más incidencia tenía, como Antioquia y Medellín. Es decir, hay unos mensajes de una sociedad que quiere otra cosa. Y el pasado 21 de noviembre, en una movilización urbana, [la ciudadanía se mostró con decisión por la paz](#). La gente hoy se la está jugando en escenarios diferentes, en la movilización. Las últimas acciones de movilización expresadas en el país demuestran que la paz sí ha devuelto la esperanza del país. El referéndum en términos de resultados dijo 'no' a la paz, pero el paro ahora le dice 'sí' a la paz. Después de tres años, **el país entendió las posibilidades que se abren con un país en paz**.

Todos esos elementos son los que fortalecen esta decisión. Es el mensaje que encontramos en Colombia. En la guerra también teníamos muertos: en dos minutos llegamos a poner hasta 52 muertos, por un bombardeo que nos cogió a la gente dormida. Y nadie dijo nada, por el contrario, el país aplaudía. Hoy, la muerte de un exguerrillero genera debate nacional porque están matando a la gente que se entregó completamente a seguir tejiendo la esperanza de la paz.

Pero ese mismo empuje popular al que apelabas se ha manifestado en diferentes direcciones. En las elecciones al Congreso de marzo de 2018, las primeras a las que concurrió el partido FARC, apenas superasteis los 55.000 votos (menos del 1 por ciento del escrutinio). En las presidenciales de mayo declinasteis finalmente la participación. Y en las elecciones municipales de octubre de 2019 que mencionas, tampoco las FARC obtuvieron un respaldo significativo. En suma, esa misma sociedad colombiana a la que te aferras, ¿realmente quiere a las FARC partido en las estructuras de Gobierno?

La construcción de paz no implica necesariamente que la gente salga a apoyar al firmante y menos en la sociedad colombiana, en donde hay otras fuerzas de cambio alternativas, que es donde se ha manifestado más el voto. Por ejemplo, en el voto por [el senador del partido Colombia Humana Gustavo] Petro, que representa en este momento las aspiraciones de cambio de la sociedad colombiana. El acuerdo no se puede medir por la simpatía que tenga el partido que surge de los firmantes del acuerdo, en definitiva. Nosotros llegamos al acuerdo de paz, a esa construcción, con una carga muy negativa sobre nuestros hombros. De alguna manera, también con una narrativa que se impuso. **Nos ganaron la narrativa de la guerra**: mucha gente nos mira como narcos, como terroristas, como violadores, etc. Desmontar eso no se hace con un decreto. Son las acciones que tiene que desarrollar la fuerza política que surge del acuerdo.

Como partido ya estamos desarrollando acciones dirigidas a poder desmontar esa estigmatización. Hoy el debate es si somos realmente capaces de estructurar un partido

para estos tiempos o si nos quedamos como una organización de exguerrilleros nostálgicos. El dilema es si queremos ser realmente un partido con perspectiva de gobierno o, sencillamente, somos y nos mantenemos como una confraternidad de lo que fue un proyecto político. Ese es el desafío que tenemos para mantenernos como fuerza política: ver si somos realmente el partido que aspira a mantener el legado histórico de las transformaciones por las que se empeñó las FARC a lo largo de toda su historia acompañando a los marginados de Colombia, a los sectores juveniles, a los sectores que piensan, si somos capaces de recogerles a todos ellos, de interpretarles, de elegir unas direcciones abiertas y amplias.

En tu discurso esgrimes una serie de conceptos, que nos gustaría que definieras. ¿Qué es la violencia? ¿Y quién o quiénes son las víctimas?

La violencia... la violencia política, que es a la que me estoy refiriendo aquí, es la que trata de evitar, a través de medios violentos, agresivos, que otra persona u otro grupo u otro partido pueda actuar en política.

Las víctimas son las personas que han sufrido la actividad de la violencia política, quienes han sido afectadas directamente como consecuencia del conflicto.

¿Hubo violencia por parte de FARC guerrilla? y ¿hubo y hay víctimas por parte de FARC guerrilla?

Por supuesto. Cuando nosotros nos planteamos la violencia como parte de la respuesta a la violencia, es decir, la violencia revolucionaria como contraparte a la violencia reaccionaria o a la violencia estatal o a la violencia de Estado, estábamos aplicando una violencia. La violencia como partera de la historia, como parte de la construcción de nueva sociedad, es un clásico. **Somos claros: generamos víctimas.** Toda guerra es violenta y genera víctimas. No hay ninguna guerra que no genere víctimas.

A raíz de estas definiciones y reflexiones, ¿te sientes víctima y también victimario, verdugo? Si fuera así, ¿te has perdonado a ti mismo?

En contexto en el que me he movido no tengo esa carga de conciencia porque no lo elegí. Aquí hay un responsable y, en términos de civilización y de construcción de civilización, desde que surge el Estado como un ente que tiene que responder por la vida y la seguridad de los ciudadanos, el responsable, el victimario fundamental, es el Estado. Por eso no tengo cargas por haber elegido tener que enfrentar una violencia institucional con una violencia desde las comunidades. Los muertos que pusimos antes, las víctimas que nos pusieron, todo eso nos obligó a que tuviéramos que levantarnos en armas.

¿Cómo vives el paso de una vida dedicada a la guerra, con la violencia que eso implica, a una vida dedicada a la construcción de la paz?

A veces los espacios para esas reflexiones no son muchos. Todavía no tengo el tiempo de sentarme a escribir o a pensar esos episodios porque el ritmo de trabajo es el que es.

¿Echas en falta esa reflexión personal?

Sí, claro, sobre todo, reflexión en el sentido de poder reafirmarse uno en lo que está haciendo. Y la reafirmación en cómo hacerlo mejor.

La construcción de la paz continúa siendo un reto pendiente en Colombia. “El país está necesitando cambios profundos que garanticen, como mínimo, la vida”, subraya Alape. Bajo ese horizonte se estableció, como uno de los ejes estructurales de los Acuerdos de paz de La Habana, la desmovilización y posterior reincorporación a la vida civil de la

comunidad excombatientes. Proyectada de forma colectiva, más de 4.000 exguerrilleros fueron integrados y articulados en torno a los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), unos espacios que desde el pasado 15 de agosto no existen en términos legales, según Alape, “por el temor de un sector afín al Gobierno que considera que eso es mantener juntos a los enemigos para que luego se reorganicen”. Sea o no bajo la forma de ETCR, la reincorporación colectiva es uno de los pilares asentados tras el alto al fuego.

— “Es el reto de la construcción de sociedad en Colombia. No se trataba de coger a unos ciudadanos y traerlos al sometimiento del Estado. Hay desajustes. De lo que se trata es de **poder establecer unas responsabilidades políticas del Estado y de los Gobiernos** de Colombia frente a la construcción de sociedad, no de si les cumplieron a 13.400 ciudadanos que firmaron un acuerdo de paz, sino al país como tal”.